

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

DEMANDANTES	: COSME WENCESLAO RIVAS BARCO, JUAN SOCORRO MOSQUERA MOSQUERA, ROGELIO LUNA ASPRILLA, YOVANNI LUNA ASPRILLA, JUAN GIL LUNA BENÍTEZ, JUAN ANDRÉS MENESES HURTADO, MANUEL FELIPE RENTERÍA CÓRDOBA, NELSON EVER HURTADO MOSQUERA
DEMANDADO	: IMPOAMERICAN GROUP SAS EN LIQUIDACION
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	:05-001-31-05-15-2021-0153-01
RADICADO INTERNO	: 239-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 036

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante solicita se DECLARE que entre la sociedad IMPOAMERICAN GROUP SAS, contratando como constructora independiente, y los demandantes existió un contrato de Trabajo de Obra; que se declare que por ser la demandada beneficiaria de la obra debe a los demandantes los conceptos de Cesantías definitivas, prima de servicios, vacaciones, intereses de cesantías e indemnización por el no pago de las prestaciones, según se expone a continuación:

<b>Demandante</b>	<b>Cesantías Definitivas</b>	<b>Prima de Servicios</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>Intereses de Cesantías</b>	<b>Indemnización por no pago de prestaciones</b>
<b>Cosme Wenceslao Rivas Barco</b>	\$480.000	\$400.000	\$200.000	\$48.000	\$19'200.000
<b>Juan Socorro Mosquera Mosquera</b>	\$200.000	\$200.000	\$100.000	\$24.000	\$21'600.000
<b>Rogelio Luna Asprilla,</b>	\$480.000	\$400.000	\$200.000	\$48.000	\$19'200.000
<b>Yovanni Luna Asprilla,</b>	\$480.000	\$400.000	\$200.000	\$48.000	\$19'200.000
<b>Juan Gil Luna Benítez,</b>	\$200.000	\$200.000	\$100.000	\$24.000	\$21'600.000
<b>Juan Andrés Meneses Hurtado,</b>	\$200.000	\$200.000	\$100.000	\$24.000	\$21'600.000
<b>Manuel Felipe Rentería Córdoba,</b>	\$200.000	\$200.000	\$100.000	\$24.000	\$21'600.000
<b>Nelson Ever Hurtado Mosquera,</b>	\$200.000	\$200.000	\$100.000	\$24.000	\$21'600.000

Por otro lado, solicita que sea condenado en costas a favor de los demandantes en caso de no allanarse a los hechos ni pretensiones de la demanda.

Como fundamentos de hecho se menciona que los señores Cosme Wenceslao Rivas Barco, Rogelio Luna Asprilla, Yovanni Luna Asprilla, Nelson Ever Hurtado Mosquera, Juan Socorro Mosquera Mosquera, Juan Gil Luna, Juan

Andrés Meneses, Manuel Felipe Rentería Córdoba, ingresaron a trabajar el **21 de octubre de 2019**; que devengaban un salario de \$2'400.000 mensuales; que el contrato era de Obra Verbal; que la obra era la construcción de un edificio en el barrio Laureles; que la entidad quedó debiendo a los demandantes el pago de la indemnización por el no pago de las prestaciones y el salario al momento de terminar el contrato de trabajo, cesantías definitivas, prima de servicios, vacaciones proporcionales e intereses a las cesantías; que desempeñaban la labor de Pílero; que durante todo el tiempo estuvieron subordinados laboralmente, ganaban un salario y ejercían la labor personalmente; que tenían horario de trabajo y debían cumplir sus labores en las instalaciones de la empresa, con herramientas de la empresa; que la obra terminó y con ello la labor contratada por la entidad demandada.

### **CONTESTACIONES A LA DEMANDA**

A través del auto del 02 de diciembre de 2022 el Juzgado Quince Laboral del Circuito dio por no contestada la demanda por parte de la entidad demandada al encontrar vencido el término para su respuesta (Expediente Digital 016).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 25 de julio de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito, declaró que entre los demandantes y la sociedad IMPOAMERICA GROUP SAS no se desarrolló una relación de carácter laboral. ABSOLVIÓ a la sociedad demandada del reconocimiento y pago de las pretensiones presentadas en su contra y se condenó en costas a favor de la sociedad demandada por un total de \$4'460.000.

### **IMPUGNACIÓN**

El apoderado de la **parte demandante**, apela la decisión de primera instancia argumentando que la juez no hace mención de la no contestación de la demanda por parte de la sociedad demandada, y que por lo tanto no se tuvo en cuenta las consecuencias jurídicas que ello implica y que por lo tanto hay que tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda por la no absolución del interrogatorio de parte de los demandados quienes buscaron como estrategia no contestar la demanda; que no se tuvieron en cuenta las 3 historias laborales presentadas donde considera plasmado que los demandantes eran trabajadores de la empresa hoy demandada. Considera que no hay razón para decir que los testigos son sospechosos, sosteniendo

que estos fueron ajustados a la verdad y que además escogió estos testigos, aunque son demandantes porque son ellos quienes conocen a cabalidad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que laboraron los trabajadores. Se argumenta que en caso tal de que la juez considerara que los testigos eran sospechosos debía pronunciarse individualmente sobre las razones por las que sospecha de estos. Manifiesta que durante el testimonio de los trabajadores existen datos que concuerdan en las diversas declaraciones como los horarios de trabajo, quien disponía de las herramientas, etc. Que por lo anterior de conformidad con el artículo 24 del C.S.T se presume que toda relación laboral esta amparada por un contrato de trabajo, siendo un hecho nítido de esto la afiliación a la seguridad social. Y además se debe revocar la sentencia porque los demás trabajadores acreditaron la relación laboral haciéndole honor a la verdad sin que exista en menor asomo de dolo de estos.

Argumenta que el Tribunal Superior de Medellín ha manifestado que los testigos no se pueden declarar sospechosos por el solo de declarar entre sí, sino porque en sus decires existan profundas contradicciones y en este caso ninguno a contradicho al otro, antes bien, han declarado la verdad real de los hechos, sin que sea posible que obtengan un fallo desfavorable a sus intereses. Por otro lado, indica que no deben ser condenados en costas dado que la entidad demandada no contestó la demanda. Concluye su argumento manifestando que para el tiempo en que se pronuncie el juzgador de segunda instancia frente a la sentencia esos salarios, prestaciones y derechos laborales de los trabajadores se habrán perdido para el futuro. Por lo anterior solicita se revoque la sentencia.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La parte demandante presentó escrito de alegatos reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

### **CONSIDERACIONES**

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si entre los demandantes Cosme Wenceslao Rivas Barco, Juan Socorro Mosquera Mosquera, Rogelio Luna Asprilla, Yovanni Luna Asprilla, Juan Gil Luna Benítez, Juan Andrés Meneses Hurtado, Manuel Felipe Rentería Córdoba, Nelson Ever Hurtado Mosquer, y la sociedad IMPOAMERICAN GROUP S.A.S, existió un contrato de trabajo, y en caso de ser positivo si hay lugar al pago de las prestaciones e sanciones moratorios solicitadas en la demanda.

Por lo anterior se abordará el problema jurídico en el siguiente orden:

## 1. De la confesión ficta.

En primer término, debe advertirse con respecto a la aplicación de las sanciones por la inasistencia a la audiencia de conciliación del representante legal de la sociedad demandada, que no hay lugar a ello teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencia SL3009-2017 Radicación Nro 47044, del 15 de febrero de 2017, en la cual se precisa lo siguiente:

“Sobre los requisitos para que opere la confesión ficta, es importante rememorar lo dicho por esta Corte, en sentencia CSJ SL6843-2016, 25 may. 2016, rad. 49975, en la que se puntualizó:

*Vale la pena recordar que la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que para que la confesión ficta prevista en el artículo 210 del C.P.C. se configure **es indispensable que el juez de primera instancia determine y especifique cuáles hechos del cuestionario escrito, de la demanda o de la contestación a ésta son susceptibles de confesión**, en los términos del artículo 195 de la misma codificación, a fin de que la contraparte pueda ejercer eficazmente y de manera oportuna sus derechos de defensa y contradicción”. (resalto intensional)*

Al tenor de la jurisprudencia transcrita se evidencia que el juzgador de primera instancia no especificó de forma detallada los hechos que eran susceptibles de prueba de confesión, a fin de que la contraparte pudiera ejercer su derecho de contradicción y defensa, sin que ello hubiese sido motivo de reparo por el apoderado de los demandantes en ninguna de las etapas del proceso, razón por la cual no puede darse aplicación a las consecuencias previstas en el artículo 77 del C.S.T, sobre este punto como ya se advirtió.

Ahora, se precisa que las consecuencias por la no contestación de la demanda por parte de la sociedad demandada traen como consecuencia que se tenga como **indicio grave** al tenor de lo consagrado en el parágrafo 2º del artículo 31 del CPTSS, sin que ello implique que deban tenerse por probados los hechos expuestos en la demanda por la no contestación de la demandada, pues como se mencionó, ello es apenas un indicio, que debe ser contrastado con las demás probanzas obrantes dentro del proceso.

## 2. De la existencia y prueba de la relación laboral.

En lo que respecta al requisito establecido en el artículo 23 del C. S. de T. subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, se tiene que, para que exista contrato de trabajo se debe acreditar 1) “La actividad personal del trabajador”, 2) “La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador”, y 3) “Un salario como retribución del servicio”.

Por ende, es la parte demandante la que tiene la carga probatoria según lo establecido en los artículos 164 y 167 del C.G.P, de demostrar la **prestación personal del servicio** con el empleador demandado y que, por ello, recibió una remuneración, **además de los extremos temporales de la relación y el salario**; tal y como lo ha señalado la Corte suprema de Justicia en sentencia SL5453-2018.

En orden de lo anterior, para efectos de declarar la existencia de una relación laboral, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral ha establecido de manera pacífica y reiterada, que resulta necesario acreditarse la prestación del servicio por quien alega ser trabajador, indicándose entre otras en la sentencia SL4518-2021 al citar la SL16528-2016, que:

*“Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.”* (Subraya intencionales de la Sala)

Una vez probada la prestación personal del servicio nos encontramos ante la presunción del artículo 24 del C.S.T, el cual establece la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, **debiendo de esta forma la parte demandada desvirtuar la subordinación** para efectos de desacreditar dicha presunción., tal y como se ha expuesto por la jurisprudencia entre otras en sentencias de la CSJ SL 1905/18, SL 6868/17, SL 878/13 y 42167 del 06/03/12, y en reciente sentencia SL1233 del 06 de abril de 2022, SL 1179 del 05 de abril de 2022.

Lo anterior significa, que a la parte demandante le basta con probar la prestación o la actividad personal, y los extremos de la misma para que se presuma el contrato de trabajo y es a la parte demandada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, lo que se traduce en un traslado de la carga probatoria, demostrando que la actividad contratada se ejecutó o realizó en forma autónoma, totalmente independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral, sin que ello se torne en una prueba diabólica. Sobre el particular véanse las sentencias SL4027-2017 y SL365 de 2019.

Respecto a este elemento esencial del contrato, en su más moderno significado, se ha entendido que es una potestad del empleador de someter al trabajador *“a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la empresa”* (Tomás Sala Franco, Derecho del Trabajo, 8ed., 1994, pág. 181), y como tal se deduce, en las más de las veces, de actos que implican el ejercicio real de estas potestades; y en palabras de la Sala Laboral de la CSJ, la subordinación *“se expresa a través de tres potestades del empleador: la directriz, la reglamentaria y la disciplinaria”* (Rad. 8476; sent. del 24 de octubre de 1996 - resalta la Sala-).

De suerte que alrededor de la subordinación gira la fundamental distinción para determinar si un contrato está regido por las leyes laborales, en contraposición con los estatutos civiles, comerciales o solidarios.

Sin embargo, debe advertirse que **la prestación del servicio debe encontrarse debidamente demostrada** tal y como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 672 de 2023, en la que al respecto indicó:

*“En ese orden, a esta Sala de la Corte le corresponde definir, si el juez de alzada erró al considerar que las pruebas incorporadas al plenario, eran insuficientes para tener por demostrada existencia de un verdadero contrato de trabajo entre partes, de suerte que no procedía la condena al pago del cálculo actuarial.*

*Para ello, importa recordar que en temas como el que ahora llama la atención, se ha ilustrado que quien alega su condición de trabajador y acredita la prestación personal del servicio, le asiste una ventaja probatoria consistente en que se presume la existencia de la relación laboral, correspondiéndole entonces al demandado destruir la presunción de que trata el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo, demostrando de que la labor se realizó en forma autónoma, independiente y no subordinada.*

*En ese orden, surge manifiesto que **no le asiste razón al demandante cuando pretende derivar de su simple afirmación impositiva de***

***haber laborado al servicio de la accionada, sin que acredite la real y efectiva prestación personal del servicio, el que se imponga la presunción del referida, y por ende, la obligación de desvirtuarla a quien se señala como supuesto empleador.”*** (Resalto de la Sala)

Partiendo de lo anterior es claro que para que se pueda aplicar la presunción del artículo 24 del C.S.T, a la parte demandante le corresponde probar la prestación personal del servicio, **además de los extremos temporales de la relación y el salario.**

En orden de lo mencionado se procede a realizar un recuento de las pruebas practicadas dentro del proceso con la finalidad de determinar si se demostró o no la pretendida relación laboral.

La parte demandante solo aportó como pruebas documentales copia de historia laboral de los señores Nelson Ever Hurtado Mosquera, Rogelio Luna Asprilla y Cosme Wenceslao Rivas Barco, (fls 41 a 47 PDF 01).

Así mismo se recibieron los testimonios de las siguientes personas:

**Nelson Ever Hurtado Mosquera**, indicó que conoció al señor Cosme desde el año 2015 cuando trabajaban en la constructora Capital, y que trabajaron para la sociedad hoy demandada desde el 21 de octubre de 2019 hasta el 03 de enero de 2020, devengando un salario de \$2.400.000 el cual era pagado cada 14 días, que la función que hacía el demandante era Pilero, que los vinculó la sociedad demandada de forma verbal y que el trabajo se terminó porque acabaron las pilas, que no les pagaron liquidación de prestaciones. Dijo que los materiales donde trabajaran eran de la empresa, y que tenían que cumplir un horario de 07:00 am a 05:30 pm.

**Rogelio Luna Asprilla**, dijo que conoce al demandante Juan Socorro Mosquera Mosquera desde hace 10 años trabajando en diferentes empresas como capital, punto Colombia y en otras obras con otros contratistas. Que está demandando a Impoamerica por la liquidación que no le pagaron. Que trabajó para la demandada desde el 21 de octubre de 2019 al 03 de enero de 2020 como pileros en la obra en laureles, devengando un salario mensual de \$2.400.000 el cual era variable. Indicó que tanto al testigo como al señor Juan Socorro Mosquera Mosquera los contrató el señor Diego Valencia de forma verbal, quien era el ingeniero. Que ellos solo ponían la mano de obra y las herramientas se las daba la empresa, qué la obra se terminó porque



terminaron de hacer las pilas, y por ultimo dijo que el horario de trabajo era de 7:00 am a 5:00 pm.

**Yovanni Luna Asprilla**, dijo que conoce al demandante Rogelio Luna Asprilla, porque es su hermano, y que están demandando a la empresa Impoamerica porque trabajaron en ella en la obra que quedaba el Laureles como pileros entre el 21 de octubre de 2019 y el 03 de enero de 2020 y no los liquidaron: Indicó que quien los contrató fue el señor Diego Valencia, quien era el dueño de la obra donde estaban trabajando. Agregó que cuando llegaron a la oficina de la demandada firmaron uno papeles y que el salario mensual era de \$2.400.000 y trabajaban en un horario de 07:00 am a 05:00 pm. Dijo además que para la contratación **firmaron un contrato**.

**Juan Gil Luna**, dijo que conoce al demandante Rogelio Asprilla desde el año 2008 en el ramo de la construcción, que demandaron a Impoamerica SAS, al señor Héctor Valencia y Diego Tabares como propietarios de la empresa, quienes eran los dueños de la empresa y la obra en la que estaban trabajando, la obra quedaba en laureles, y trabajaban haciendo pilas en un edificio, que empezaron el 21 de octubre y salieron el 03 de enero de 2020. Que no les pagaron la liquidación y que el salario era de \$2.400.000

Que el contrato fue verbal que a la obra los llevó el señor Nelson Ever Hurtado, quien fue quien los recomendó. **Que no firmaron ningún documento**. Que el horario era el mismo de 07:00 am hasta las 04:30 o 05:00 pm. Indicó que la maquinaria y los elementos de trabajo eran de Héctor Valencia y el señor Diego que eran como tal los dueños de la obra y la empresa. Que si faltaba al trabajo lo podían echar porque eso es lo que pasa en las obras, si tenían que salir tenían que pedir permiso al encargado que le decían el tío, Acepta que les pagaron todo menos la liquidación. **Que a veces el salario era mayor a \$2.400.000 cuando había más rendimiento, y que dejaron de trabajar porque no les pagaban puntual**. Luego dijo contradiciendo lo ya mencionado que habían dejado de laborar porque lo que les tocaba hacer a ellos ya se había terminado.

**Juan Andrés Meneses Hurtado**, dijo que conoce al demandante Juan Gil Luna en una obra en San Francisco de la empresa William Cardona, en el 2013, que el horario era de 07:00 am a 05:00 pm, que está declarando en favor de Juan Gil porque terminaron las pilas en la obra.

**Manuel Felipe Rentería**, dijo que conoce al demandante Andrés Meneses, y que ambos demandaron a la empresa Impoamerica por las prestaciones que no les pagaron. Que quienes los contrataron fueron El señor Diego Valencia y Oscar Tabares quienes eran los jefes inmediatos, que el contrato fue verbal desde el 21 de octubre de 2019 al 03 de enero de 2020. Que terminaron el contrato cuando terminaron la labor que estaban haciendo de excavación de pilas en Laureles. Que la empresa les deba las herramientas y materiales, y tenían un salario de \$2.400.000. **Que les pagaban en efectivo en la obra** y recibían el pago en efectivo de parte del señor Diego Valencia. Indicó que el horario era de 07:00 am a 05:00 pm, de lunes a viernes y los sábados hasta las doce o doce y media, más tardar hasta la una.

**Nelson Ever Hurtado Mosquera**, dijo que conoció a Manuel Felipe Renteria, y que tuvieron vinculación con la demandada desde el 21 de octubre de 2019 hasta el 03 de enero de 2020, trabajaron lo que es el tema de excavaciones de pilas como pileros en la empresa IMPOAMERICA GROUP S.A.S, y cuando terminaron la labor se les terminó el contrato. Fue contratado con el demandante de forma verbal, las herramientas se las daba la empresa y ellos solo ponían la mano de obra. Cumplía un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y que si no cumplían el horario los podían despedir, y si tenían que salir debían pedir permiso a Diego valencia que era uno de los socios dueños de la empresa.

**Cosme Wenceslao Rivas Barco**, dijo que conoce al demandante Nelson Mosquera, y que demandaron porque terminaron la obra de las pilas y el señor que los contrató no les dio la liquidación, que el salario era de \$2.400.000, **en un horario de 07:00 am a 04:00 pm**. Que la función que hacían era de pileros y terminaron el contrato cuando terminaron de hacer las pilas en la obra, que los materiales los ponía la empresa y ellos la mano de obra, que si no cumplían el horario los podían sacar, y que antes de demandar reclamaron las prestaciones a la empresa y les dijeron que no tenían derecho a la liquidación.

Partiendo de lo anterior, y después de ser valorada en su conjunto con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), se permite la Sala concluir que para el presente caso no se cumplen los presupuestos para tener por probada la relación laboral pretendida entre las partes, por lo siguiente:

En primer término, debe indicarse que a los demandantes le bastaba con demostrar la prestación personal del servicio en favor de la sociedad

demandada IMPOAMERICA GROUP SAS hoy en Liquidación, para que en su favor operara la presunción de la existencia de un vínculo laboral, contenida en el artículo 24 del C.S.T.

Visto lo anterior se advierte que los demandantes para probar la prestación personal del servicio según las pruebas aportadas al proceso allegaron respecto a la prueba documental solo copias de las historias laborales de los señores Nelson Ever Hurtado Mosquera, Rogelio Luna Asprilla y Cosme Wenceslao Rivas Barco, (fls 41 a 47 PDF 01), sin embargo se precisa que dichas pruebas por si solas no son suficientes para tener por demostrada la prestación personal del servicio, pues si bien estas pueden ser un indicio de la prestación del servicio, las mismas tiene que ser cotejadas y complementadas con las demás pruebas aportadas al proceso como se describirá a continuación.

Ahora, respecto a la prueba testimonial practicada dentro del proceso precisa la Sala que la a quo no debió decretar como prueba testimonial las declaraciones de los mismos demandantes por lo siguiente:

Según el artículo 165 del C.G.P, son medios de prueba, **“la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”**

Con respecto a la prueba testimonial es pertinente citar la definición<sup>1</sup> o concepto que trae Fabian Vallejo Cabrera al citar a REDENTI, cuando expresa que existe testimonio **“cuando alguien que no sea ni actual ni virtualmente parte del proceso o de la causa, exponga en forma narrativa y con finalidad informativa, hechos o circunstancias que declare conocer (haber aprendido), de visu et auditu (de vista o de oído), y que puedan suministrar directamente o también indirectamente (en vis presuntiva) elementos de convicción respecto de lo que constituye tema de prueba”**.

Por su parte para José María Obando Garrido la declaración de parte y la confesión son: “la declaración consciente, provocada, espontánea y expresa de una parte capaz ante un juez, con las formalidades establecidas en la ley, de ser cierto un hecho o un acto lícito, posible y controvertido, proveniente de

---

<sup>1</sup> Vallejo Cabrera, Fabian, Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, librería Jurídica Sánchez Ltda, octava Edición 2014, pág. 259.

su actuación personal o de su conocimiento, **afirmado por la parte contraria, que le perjudica o le es desfavorable y que beneficia o favorece a esta última**<sup>2</sup> (resalto intensional)

En este contexto, la diferencia sustancial entre la declaración de parte y el testimonio de terceros gira en torno a que el primero de ellos el deponente se trata de un sujeto procesal vinculado al juicio **por el interés particular y directo que tienen en los resultados de las pretensiones** de tal suerte que lo que se persigue con su declaración es obtener sobre la misma el conocimiento que tengan de los hechos que interesan al proceso, **como fuente de confesión para formar el conocimiento del juez**, mientras que el testimonio de terceros **es rendido por quien no es parte del juicio** y en consecuencia no surte efectos frente a él la decisión que en éste se adopta.

Ahora, el inciso final del artículo 191 del C.G.P establece con respecto a la declaración de parte lo siguiente: “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”, debiendo advertirse que frente al mismo se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia CS 780 del 10 de marzo de 2020, donde al respecto se explicó en alcance de la anterior disposición en el siguiente sentido:

*“Tanto en el anterior como en el nuevo estatuto procesal el interrogatorio que se hace a las partes se circunscribe a que establezcan el objeto del proceso y fijen el objeto del litigio, para lo cual deberán exponer los hechos operativos que contextualizan el caso, los hechos probatorios susceptibles de confesión y los hechos que requieran ser probados.*

*Los hechos operativos y los hechos probados podrán ser tenidos en cuenta más adelante para la elaboración de los enunciados facticos porque no dan lugar a discrepancias, **DE AHÍ QUE LA SIMPLE DECLARACIÓN DE PARTE NO ES UN MEDIO DE PRUEBA**, pues los hechos operativos que de ella se extraen jamás hacen prueba a quien los refiere. (resalto intensional)*

En este sentido debe precisarse que el interrogatorio de parte en los términos del artículo 191 ibidem es idóneo en la medida en que sirva para provocar confesión, no siendo posible en este sentido practicarse un testimonio como tercero a quien ostenta la calidad de parte activa de la Litis, en tanto que, de ser así, se estaría permitiendo que una de las partes del proceso como lo es en este caso los demandantes puedan declarar **abiertamente** sobre los

---

<sup>2</sup> Obando Garrido, José María, Derecho Procesal Laboral, Editorial Temis, sexta edición, pagina 322.

hechos objeto de debate sin restricción alguna, situación está que resultaría notoriamente contradictoria con la finalidad misma del interrogatorio de parte, que como ya se advirtió es provocar la confesión.

Por todo lo expuesto considera la Sala que la posibilidad de practicar los testimonios de los mismos demandantes no era procedente, por tener la calidad de parte y por ello su declaración en el juicio solo es viable a través del interrogatorio **bien de oficio o bien a instancia** de la contraparte, al tenor de lo consagrado en el artículo 198 del C.G.P.

No obstante, lo anterior, como la prueba fue practicada la misma debe ser valorada conforme se expone a continuación.

Para analizar la prueba testimonial antes mencionada resulta necesario traer a colación lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 05 de mayo de 1999, citada en sentencia SC795 del 15 de marzo de 2021 radicación Nro 68679-31-84-002-2013-00027-01, donde se han trazado algunas pautas para orientar el análisis crítico de la prueba testimonial de la siguiente forma:

*“Entre los diversos aspectos a cuyo análisis debe dedicarse el juez para ponderar la eficacia probatoria del testimonio se encuentran algunos de naturaleza subjetiva, que le permitan establecer la idoneidad del testigo para rendir declaración judicial, aptitud que debe enjuiciarse, entonces, desde dos ópticas claramente definidas por el legislador: de un lado, la habilidad fisiológica del declarante para percibir los hechos sin equivocarse, requerimiento este que habrá de conducirlo a rechazar ab-initio el testimonio de las personas previstas en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil, amen que lo impulsara a cerciorarse de las condiciones sensoriales de los deponentes; y, de otro lado, a determinar su idoneidad moral, particularidad que debe apremiarlo a examinar con mayor celo el dicho de quienes se encuentren en cualquier situación que los tome proclives a engañar, mentir, circunstancias estas que, valga la pena anotar, puede ser, según lo prevé el artículo 217 ejusdem, de muy variada índole.*

*Otras condiciones, por el contrario, apunta a la forma como se produce la declaración, esto es, al modo y la oportunidad de la misma, aspecto que conducirá al juzgador a establecer, entre otros, el adecuado discernimiento del lenguaje utilizado por el testigo y a preocuparse por advertir si este recurrió a un estilo artificioso o afectado, lo que de ordinario denota un premeditado esfuerzo mental por engañar.*

**De igual modo, cuando algunas expresiones y precisiones se repiten mecánicamente en varios testimonios, podrá colegir el juzgador cierto afán de los deponentes por narrar un libreto preestablecido,** ocurrencia que les podría restar crédito habida cuenta que esa “identidad de inspiración” o concordancia entre los testigos es, en verdad, inusitada. **También estará atento a las vacilaciones o**

**turbaciones del declarante, pues ellas suelen obedecer al temor a ser descubierto, a no contradecirse, nada de lo cual suele acontecer cuando se dice con la verdad.**

(...)

*Finalmente, cabe destacar aquí que el sentenciador debe reparar en las condiciones que atañen con el contenido de la declaración y que le imponen el escrutinio de aspectos intrínsecos de la misma, como su verosimilitud o inverosimilitud, la índole asertiva o dubitativa de la misma, la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su percepción, etc., o extrínsecos, como las **contradicciones** en que hubiere incurrido con otros testimonios considerados más fiables. (SC012-1999, del 05 de mayo de 1999, rad Nro 4978)”.*

También es necesario hacer alusión a lo esgrimido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 129 de 2021, en la que respecto a las reglas legales sobre la valoración de testimonios indicó:

66. Las reglas que se refieren a la evaluación de los aspectos subjetivos del interrogado, son las siguientes: (i) el juez debe valorar si aquel está incurrido en alguna de las causales de inhabilidad, absoluta<sup>3</sup> o relativa,<sup>4</sup> para rendir el testimonio. (ii) Igualmente, le corresponde resolver la tacha del testigo que presente alguna parte,<sup>5</sup> cuando éste sea sospechoso por razones de “[...] *dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.*”<sup>6</sup> Y, (iii) **también puede indagar en la imparcialidad del testigo, procurando identificar si existen motivos para su eventual parcialidad.**<sup>7</sup>

67. Finalmente, respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular. (i) Siendo necesario procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, la ley impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre “la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento [...]”<sup>8</sup>. La respuesta que se dé a esa pregunta también habrá de estudiarse. Por último, (ii) el Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), **el juez debe analizarlos en conjunto y definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos.** Todo esto “*inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes*”<sup>9</sup>. (resalto intencional).

<sup>3</sup> Código de Procedimiento Civil. Artículo 215. “Son inhábiles para testimoniar en un todo proceso: // 1. Los menores de doce años. // 2. Los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia. // 3. Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito ok por lenguaje convencional de signos traducibles por intérpretes”.

<sup>4</sup> Código de Procedimiento Civil. Artículo 216. “Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado: // 1. Los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas. // 2. Las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.

<sup>5</sup> Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Artículo 58. “Las tachas del perito y las de los testigos se propondrán antes de que aquél presente su dictamen o sea rendida la respectiva declaración; se acompañará la prueba sumaria del hecho en que se funde y se resolverá de plano, si la tacha fuere contra el perito, o en la sentencia definitiva si fuere contra los testigos”. // En sentido similar, Código de Procedimiento Civil. Artículo 218 –inciso 2–. “Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración”.

<sup>6</sup> Código de Procedimiento Civil. Artículo 217.

<sup>7</sup> Código de Procedimiento Civil. Artículo 228 –numeral 1–. “La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas: // 1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya cursado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha”.

<sup>8</sup> Código de Procedimiento Civil. Artículo 228 –numeral 3–.

<sup>9</sup> Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Artículos 60 y 61.

Atendiendo a la jurisprudencia en cita debe decirse que para la Sala los testimonios rendidos dentro del proceso no le ofrecen credibilidad y convencimiento con la finalidad de tener por demostrada la prestación del servicio, por lo siguiente:

En primer término, debe advertirse que todos tienen un interés directo en las resultas del proceso al ser entre todos demandantes con las mismas pretensiones y testigos al mismo tiempo, debiendo precisarse además que sus declaraciones no son espontáneas pues todos los demandantes al momento de rendir sus declaraciones siempre estaban pendiente al lado de la cámara como si estuvieran recibiendo instrucción de alguien para emitir su respuesta.

De otro lado se advierte que las declaraciones rendidas para la sala no ofrecen credibilidad alguna pues nótese como los deponentes dijeron todos al unísono cuando se les preguntaba por la ejecución de la labor, que la misma se había dado de forma precisa desde el **21 de octubre de 2019 hasta el 03 de enero de 2020**, situación que denota como si todos ellos tuvieran un libreto preestablecido, por lo que en los términos de la jurisprudencia antes citada, esta identidad de inspiración o concordancia entre los testigos es, en verdad, inusitada que lleva a inferir a la Sala falta de credibilidad en sus dichos y que todos ganaban exactamente el mismo sueldo.

Además de lo anterior, se nota en las declaraciones ciertas incoherencias, inconsistencias y contradicciones tales como que el señor Nelson Ever Hurtado Mosquera, dijo que el horario era de 07:00 am a 05:30 pm, Rogelio Luna Asprilla, dijo que era de 7:00 am a 5:00 pm y Cosme Wenceslao Rivas Barco dijo que el horario era de 07:00 am a 04:00 pm.

Respecto a la suscripción del contrato Yovanni Luna Asprilla, dijo que para la contratación **firmaron un contrato**, y de forma contradictoria Juan Gil Luna, dijo que fue verbal que no firmaron ningún contrato, Manuel Felipe Rentería, y Nelson Ever Hurtado Mosquera dijeron que **todo fue verbal**.

Respecto al pago el señor Rogelio Luna Asprilla, dijo que les pagaban por la 33, y Manuel Felipe Rentería, dijo que les pagaban en efectivo en la obra.

Por lo mencionado con anterioridad concluye la Sala que conforme a las pruebas aportadas al proceso no se logró demostrar de forma efectiva la

prestación personal del servicio en los extremos solicitados en la demanda, para que de esta forma pudiera operar la presunción del artículo 24 del C.S.T.

En virtud de lo anterior, lo legal y pertinente será CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de cada uno de los demandantes en la suma de \$325.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

### **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de cada uno de los demandantes en la suma de \$325.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

**TERCERO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



Radicado Único Nacional 05-001-31-05-15-2021-0153-01  
Radicado Interno 239-23



**MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: COSME WENCESLAO RIVAS BARCO, JUAN SOCORRO MOSQUERA MOSQUERA, ROGELIO LUNA ASPRILLA, YOVANNI LUNA ASPRILLA, JUAN GIL LUNA BENÍTEZ, JUAN ANDRÉS MENESES HURTADO, MANUEL FELIPE RENTERÍA CÓRDOBA, NELSON EVER HURTADO MOSQUERA
DEMANDADO	: IMPOAMERICAN GROUP SAS EN LIQUIDACION
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	:05-001-31-05-15-2021-0153-01
RADICADO INTERNO	: 239-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/162> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 13 de marzo de 2024 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 13 de marzo de 2024 a la 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

SECRETARIO